

Boletín Encuentro

Secretaría de Prensa

Docentes y estudiantes, unidos en defensa de la salud y de la educación

Yesid Quiroga

Aunque los medios de comunicación se hayan centrado más en los problemas de movilización en las ciudades, la marcha del 7 de septiembre fue histórica en Colombia por la masiva asistencia de docentes y estudiantes. El movimiento educativo se hizo sentir.

Este 7 de septiembre fue una fecha histórica para Colombia, la multitudinaria movilización nacional le demostró al gobierno que la comunidad educativa en general está descontenta con sus políticas neoliberales dirigidas a privatizar la educación en todos sus niveles.

Tan sólo en Bogotá aproximadamente 40.0000 maestros y maestras se manifestaron para llenar la Plaza de Bolívar, hecho que rara vez sucede, para exigir el respeto al modelo de salud del magisterio y la eliminación de las políticas privatizadoras de la educación.



La postura de los y las docentes es clara: No permitirán que se realicen modificaciones que conlleven a acabar con el Régimen Especial y, menos aún, terminar en el "engendro" llamado Ley 100.

Así mismo, los y las docentes estuvieron acompañados por centenares de estudiantes, quienes llenaron por segunda vez en el día la Plaza más representativa del país. Nuevamente los estudiantes de universidades públicas, privadas, de secundaria y de educación técnica unieron sus voces para manifestar que no se creen el cuento del gobierno de retirar de la reforma a la Ley 30 el artículo sobre autorizar las instituciones con ánimo de lucro, porque en el proyecto se mantu-

vieron varios puntos lesivos que se dirigen a privatizar la educación superior.



Andrés Álvarez, representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, señaló: "Hay una gran inherencia de la empresa privada y de la empresa privada trasnacional en la universidad colombiana por medio de la extensión y la investigación, son ellos los que dicen qué se tiene que investigar, son ellos los que designan cuáles con los proyectos de investigación prioritarios, nosotros creemos que deben haber recursos suficientes para que la universidad investigue autónomamente y defina su perfil investigativo".

Algunos de los coros de los estudiantes insistían: "Educación gratuita y financiada por el Estado" o "Menos presupuesto para la guerra, más para la educación", puntualizando en que si el Estado invirtiera más en la educación de sus jóvenes y



asegurara su vida profesional, le quitaría muchos estudiantes a la guerra. El inconformismo con el incremento presupuestal determinado por el gobierno para las universidades públicas genera rechazo porque no tiene en cuenta todas las necesidades de las instituciones y establece condiciones difíciles de cumplir para acceder al mismo. "Condicionan a unos resultados de investigación a unos indicadores de gestión, los cuales no han sido discutido con la comu-

tigación a unos indicadores de gestión, los cuales no han sido discutido con la comunidad universitaria ni con los rectores, ni con el sistema universitario estatal, ni con los estudiantes, con nadie de la comunidad universitaria. Lo peligroso de esto es que los indicadores de gestión tienden a fortalecer a las universidades grandes, pero van en contra de las posibilidades de



acceder a esos recursos por parte de las universidades más pequeñas, más nuevas, especialmente las universidades regionales", agregó Andrés Álvarez.

La manifestación del 7 de septiembre fue histórica porque el sector educativo en pleno, apoyado por organizaciones sociales y sindicales y actores sociales, demostró que su voz es más fuerte que las del gobierno, la ministra de Educación e, incluso, los medios de comunicación, al confirmarle a Colombia que la educación y la salud son derechos y no mercancías.

Septiembre 7 2011 Pág.

La estrategia del gobierno para acabar con el Régimen Especial

Yesid Quiroga

La ministra de Educación repite insistentemente que no acabará con el Régimen Especial de Salud y al mismo tiempo afirma cosas como la "licitación será abierta y plural" abriéndole una puerta a las EPS para que se hagan con el servicio.

El sistema de salud colombiano está en crisis, aun así el gobierno, con la ministra de Educación como vocera, insiste en que no acabará con el Régimen Especial de Salud pero le da vía libre a las EPS para que participen en la convocatoria para prestar estos servicios al magisterio.

La estrategia del gobierno es más sencilla de lo que parece. Hasta último momento ratificará que no desaparecerá el régimen especial de salud, tal como lo hizo la ministra María Fernanda Campo en una reciente intervención radical: "Quiero ratificarle a todos los docentes de Colombia que su régimen excepcional preferencial se lo vamos a preservar y que no los vamos a incluir como dicen de manera tendenciosa en un comunicado que escribe FECODE donde dice que los vamos a incluir en la Ley 100, eso no es cierto". Sin embargo, al mismo tiempo está empeñado en modificar los términos de referencia para habilitar a las EPS restringidas legalmente hasta el momento— para que participen en la convocatoria y accedan a los dineros que aportan los y las docentes para salud, que es en últimas su objetivo primordial. Como lo señaló el presidente de FECODE, Senén Niño Avendaño, el ministerio se está basando en un concepto de la Superintendencia de Salud --casualmente la entidad que investiga a las EPS- para

incluir a las EPS en la convocatoria.

La situación tendrá consecuencias más graves de lo que parece. Una vez que las cuestionadas EPS entren a la oferta, no habrá nada que les impida "hacerse" a la prestación del

servicio. Entonces, en corto plazo, serán das del régimen de riesgos profesionales estas entidades, que demoran hasta tres meses para entregar una consulta, las



encargadas de definir si una maestra embarazada se encuentra incapacitada para asistir a su sitio de trabajo, por poner un solo ejemplo.

A esto apunta la explicación del senador Jorge Robledo, uno de los mayores críticos del sistema de salud creado por la Ley 100: "La gran ganancia del magisterio es que no está sometido a ningún gremio de EPS, tienen un régimen especial y ese régimen especial les asegura no tener cuotas moderadoras, ni copagos, ni estar presos del POS. Otra serie de tragedias que sí viven el resto de los colombianos, y el gobierno quiere entonces empujarlos a que termine en manos, en las garras de las EPS, utilizando ahí ciertas interpretaciones que no es del caso mencional".

Otra de las pérdidas del magisterio seria la integralidad, que es una de las características que hace Especial al Régimen; de acuerdo con el presidente de FECODE, esta consiste en "que el prestador del servicio de salud atiende también las

> enfermedades profesionales, los accidentes trabajo, califica y valora la pérdida de capacidad laboral de los educadores para viabilizar el reconocimiento pago de las prestaciones deriva-

tarea que no podrían realizar ni las EPS ni las medicina prepagada por cuanto lo

prohíbe la legislación nacional".

Con el aval del Estado, la salud en Colombia se ha convertido en un negocio al servicio de los empresarios que juegan con los dineros, las enfermedades y los medicamentos de los menos favorecidos. Los casos de Salupcoop y Humana Vivir (ambas intervenidas) comprueban que la corrupción dentro de muchas EPS las hace insostenibles ética y económicamente, porque el dinero que aportan los usuarios se destina al despilfarro de los propietarios.

"FECODE no le miente al país, la que le está mintiendo es usted, señora ministra, a nuestro criterio. Le está mintiendo porque por un lado dice que respeta el mode-



lo de salud del magisterio, pero, por otro lado, nos está diciendo que nos va a llevar a las EPS y las IPS, y esto no es otra cosa que desmontar el modelo y comprometer aún más los recursos del magisterio o de la salud del magisterio, para fortalecer unas entidades tan cuestionadas como ya todo el mundo lo sabe", sostuvo el representante ante al Fondo de Prestaciones y secretario de Seguridad Social de FECODE, **Enrique Contreras.**

Excusándose en buscar el mejoramiento en la prestación del servicio y ad portas de la nueva contratación, la verdad es que el respeto al Régimen Especial por parte del gobierno se presentará quizás sólo en el papel, porque en la práctica pretende dejar la vida de los maestros y maestras y de sus familias condenadas a los padecimientos propios de la fatídica Ley 100.

Septiembre 7 2011 Pág. | 2

¿Realmente hay menos estudiantes en Soacha?

Yesid Quiroga

En el municipio de Soacha (Cundinamarca), un estudio del gobierno demostró que había menos estudiantes que los contabilizados, las autoridades educativas dudan a cerca de los métodos de recolección de datos y de la fiabilidad de los mismos.

Según un estudio del gobierno, en Soacha hay 3 mil 521 estudiantes menos de los reportados por la secretaría de Educación, lo cual implicó un recorte de 4 mil 120 millones de pesos al presupuesto educativo, no obstante, este estudio se basa en datos que no corresponden con la realidad del municipio.

Así lo denunció Gerardo Rodríguez, ex secretario de educación municipal y actual rector de la Ciudadela Sucre, sobre la auditoría realizada por el gobierno "en la institución donde yo soy rector no se hizo la auditoría, me imagino que hicieron algún muestreo, me imagino que fue así"; y también tiene en su cabeza las cifras de la población que atiende: "Contamos con 2004 estudiantes, 70 docentes, 3 sedes".

El no registro de 2 mil 104 estudiantes generó dudas sobre la auditoría contratada por el MEN, pero además Fabio Correa, presidente de la subdirectiva sindical del municipio, quien trabaja en una institución con 5 mil 200 estudiantes, asegura que jamás se enteró del estudio ni como docente ni como sindicalista, "no tengo conocimiento de la auditoría que hizo el Estado. No sé, por lo menos desde el sindicato nunca se conoció que el gobierno estaba haciendo visitas en los colegios y que estaba corroborando efectivamente cuántos estudiantes había en cada institución".



Ante tales inconsistencias y el recorte tan significativo, surgen suspicacias, "este gobierno está interesado en recortarle a la educación oficial y a la educación en general presupuestos. Sería una forma de mirar también cómo hace aparecer este tipo de datos porque esa aseveración la hizo el presidente y no sabemos sobre qué real o sobre qué bases ciertas tomó la determinación", continuó el presidente de la subdirectiva sindical.

Ante las inconsistencias, el secretario de Educación contrató con la UNAD otra auditoria que irá a la totalidad de instituciones y dejará registro dactilar de cada estudiante. La problemática se agrava porque es difícil contabilizar estudiantes cuando el mismo gobierno le hace competencia a la educación pública entregando los alumnos a los colegios en concesión.

La lista de inconvenientes surge a razón de la política del gobierno de definir el presupuesto de cada población con base en el número de estudiantes. FECODE siempre ha manifestado que la capitación no es la forma de financiar la educación porque genera corrupción y que se debe retornar a las partidas globales que tenían en cuenta servicios, infraestructura, dotación, salidas y demás rubros propios del sector.

La propuesta para aplicar los PEPA como forma de innovación

Yesid Quiroga

La idea central de la propuesta del psicólogo colombiano, que presentó ante la comunidad educativa de Soacha, es que FECODE y otras organizaciones se sumen a esta causa y firmen un acuerdo el próximo 26 de octubre en Cartagena.

El Fundador y director científico de la Fundación Alberto Merani, Julián de Zubiría Samper, presentó una propuesta para mejorar la calidad de la educación en Colombia, la cual construyó con maestros como Abel Rodríguez, Francisco Cajíao y Ubaldo Mesa.

"Creo que si sumamos fuerzas FECODE, el CEID, los investigadores, los pedagogos, los medios masivos, porque los medios masivos de tv son causa y efecto, son también causa por que los medios masivos representan y divulgan una imagen, una ideología, una estructura de valores, entonces, los medios masivos deben firmar el acuerdo", indicó el psicólogo Julián de Zubiría. La propuesta del

colectivo de maestros antes mencionado integra la iniciativa de FECODE referente al desarrollo de Proyectos Educativos Pedagógicos Alternativos (PEPAs).

Julián de Zubiría continuó: "Hoy en día innovar en Colombia es muy costoso, hoy en día innovar es muy difícil, hoy en día no nos dejan los rectores, el ministerio, los supervisores. La propuesta del movimiento es que el país se llene de PEPAs, esa idea de FECODE, este movimiento la ha de incorporar. Es una ironía que un gobierno llame 'Revolución Educativa' a un país donde los niños todavía tristemente no han aprendido a pensar. Es una ironía decir que estamos en plena 'Revolución Educativa', cuando sólo po-



dríamos hablar de educación de calidad en el 2 ó 5% de la población, la revolución educativa en Colombia no ha empezado, está empezando".

Por su parte, el profesor brasileño Valdemar Gregory habló de la necesidad de

Septiembre 7 2011

quitarle la educación al mercado porque es el que hoy tiene mayor influencia en el pensamiento de los jóvenes. "El mercado comanda hoy lo que tiene que pensar, comer, comprar, gastar y vivir la gente. El mercado es la gran escuela hoy día, la escuela ya no es casi escuela para nada, la muchachada se aburre porque quiere lo que enseña el mercado, sea consumo, sea propaganda. El mercado enseña ilusiones de felicidad y nosotros no estamos diciendo que eso es la educación. Toca entonces revigorizar la educación, poniéndola el cerebro en el centro". La tesis de este

maestro consiste en una educación "tricerebral", es decir, que se encargue de desarrollar la parte emocional del buen trato, el pensamiento crítico y las capacidades de emprendimiento profesional para que cada ciudadano genere formas de ganarse la vida sin atropellar a los demás.

CSI: "En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores"

Omaira Morales Arboleda

Delegaciones de las Centrales internacionales, Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) visitaron Colombia y manifestaron su preocupación por la impunidad que se registra en el país.

La historia le dio la razón a la Central Unitaria de Trabajadores y a los detractores del acuerdo laboral firmado con algunos sindicatos, pues este ha sido inoperante frente a las cifras de asesinatos y, como si ya no fuera oscuro el panorama, los índices de impunidad se acercan al 100%.

Luego del pacto hubo 13 asesinatos de sindicalistas y desde el 2000 más de 3 mil casos. El secretario de la CSA en Colombia, Víctor Báez, se pronunció sobre el tema: "En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores a pesar de la ofensiva diplomática del gobierno a nivel del exterior y especialmente la OIT tratando de hacer creer que si se respetan o que el gobierno tiene una política de defensa en los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, realmente no hay política".

Colombia se está distanciando abierta-



mente al acontecer de América Latina frente a la garantía de los derechos laborales, sindicales y prestacionales. Mientras en Brasil el 30% de los trabajadores son sindicalizados y el 69% está cubierto con contrato colectivo, Uruguay, 40% sindicalizado y el 80% con contrato colectivo; Argentina con 40% afiliado y el 70% cubierto en Colombia las cifras son delirantes y violentas. En Colombia, de 20 millones de trabajadores y el 4% está

sindicalizado y el 1% tiene contrato colectivo, estas pobres cifras son resultado, en gran parte, de la campaña de desinformación estatal que desestima la sindicalización y que las entidades utilizan para infringir los derechos de los trabajadores.

Saharam Borrow, representante de la CSI, señaló que se requiere "crear nuevos campos de actuación global, por ejemplo con la actuación de la OIT, hay también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, son todos caminos, de manera que podemos tener una acción global para acabar con la cuestión de la impunidad y la muerte de sindicalistas y trabajadores en Colombia".

La Labor de la justicia colombiana ante los casos de violación de derechos de los trabajadores ha sido ineficiente, pues son muchos los casos de coacción, violencia, persecución y homicidios que simplemente reposan en los archivos de la nación.



ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Yesid Quiroga. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. ASISTENTE, Karen Buitrago. PRODUCTOR, Paola Mejía. EDITOR, Óscar Olvera. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto E. Ballesteros Zapata.

Septiembre 7 2011 Pág. | 4